

Santiago, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 6: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos tercero a octavo, que se eliminan.

**Y teniendo, además, en consideración:**

1º) Que en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República se asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y, en consecuencia, precisa su letra b), nadie puede ser privado de esa libertad ni ella restringida *“sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”*. Agrega la letra e) del mismo precepto citado que *“La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad”*.

El texto reproducido demuestra que la libertad personal es un derecho con reconocimiento constitucional que obedece a la situación normal o general de todo ciudadano, quien sólo podrá verse privado o restringido del mismo, excepcionalmente, en los casos y siguiendo las formas que definan la misma Constitución y las leyes, de manera que de no presentarse alguna de tales situaciones o no respetarse dichas formas, tal privación o restricción deviene en contraria a la Constitución y las leyes;

2º) Que, en concordancia con estos principios constitucionales, un principio capital de la reforma procesal penal es el carácter de medida de último recurso que posee la prisión preventiva, la que procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las



finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad.

Corroboran lo anterior, los Tratados Internacionales sobre derechos esenciales de la persona humana, integrados a nuestro ordenamiento jurídico, que excluyen la prisión preventiva como regla general respecto de quienes están sometidos a juzgamiento, señalando, no obstante, que la libertad puede estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo (PIDCP, artículo 9);

A lo anterior se adiciona la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar toda forma de violencia en contra de la mujer, Belém do Pará, y más específicamente, las normas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes contenidas en las Reglas de Bangkok, en particular, la regla número 57, cuya aplicación resulta insoslayable.

**3º)** Que, como ya se señaló, el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República señala que la prisión preventiva, procederá cuando dicha medida sea considerada por el juez *“necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad”*, lo que debe ser complementado con el artículo 140 del Código de Procesal Penal que prescribe que el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado *“siempre que el solicitante acredite que se cumplen los siguientes requisitos: a) Que existen antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investigare; b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor,*



*cómplice o encubridor, y c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga”;*

**4º)** Que en lo concerniente a las “formas” que deben seguirse para privar de la libertad personal a un imputado mediante la medida cautelar de prisión preventiva, el artículo 36 del Código Procesal Penal, que rige para toda resolución y actuación judicial y, por tanto, también para aquella que resuelve una petición de esa medida o la mantención de la misma, dispone que “*Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación.*” El artículo 122 del mismo código, consagra como principio general de toda medida cautelar personal, que éstas “*serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada*” y el artículo 143 del citado cuerpo legal, ya específicamente en relación a la prisión preventiva, señala que al concluir la audiencia respectiva, “*el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión.*”

Por su parte el artículo 144 del mencionado código establece que “*si la prisión preventiva hubiere sido rechazada, ella podrá ser decretada con posterioridad en*



*una audiencia, cuando existieren otros antecedentes que, a juicio del tribunal, justificaren discutir nuevamente su procedencia”;*

5º) Que, en concordancia con lo anterior, para que el juez pueda decretar la prisión preventiva, el solicitante deberá acreditar que se cumplen los requisitos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, debiendo el tribunal detallar, precisar o acotar, y analizar, los que le fueron útiles para tener por concurrentes cada uno de los extremos del artículo 140, para justificar la imposición de esa cautelar, como lo demanda el artículo 143, del mismo cuerpo legal mencionado, y para el caso de la imposición de la misma, cuando se hubiera rechazado, el juez deberá fundarla en otros antecedentes que lo justifiquen, conforme lo establece el artículo 144.

En síntesis, conforme se ha venido sosteniendo por esta Corte en la materia debe tratarse de una resolución que, sin necesidad de cumplir las exigencias de fundamentación propias de una sentencia condenatoria, en forma “clara y precisa” exponga los antecedentes calificados por los que se tuvieron por acreditados, los requisitos que el artículo 140 del Código Procesal Penal prevé para ello. (SCS Rol N° 4688-11 de 31 de mayo de 2011, Rol N° 5437-12 de 19 de julio de 2012, Rol N° 23.772-14 de 10 de septiembre de 2014 y Rol N° 6659-15 de 22 de mayo de 2015).

Por otro lado, esta Corte también ha puesto énfasis en que la fundamentación de la resolución que dispone la medida de prisión preventiva “*es el antecedente inmediato que la justifica en términos de permitir la sociabilización de la misma a la vez que el adecuado control por los intervinientes de las resoluciones jurisdiccionales*” (SCS Rol N° 5858-2012 de 6 de agosto de 2012), exigencia que también se impone a la resolución que modifica el régimen cautelar decretado



respecto del imputado, según se ha explicado;

6°) Que, en la especie, en la audiencia de 25 de mayo del año en curso, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, en sus autos Rit 66-2024, resolvió rechazar la solicitud planteada por el Ministerio Público en orden de decretar la prisión preventiva en contra de la amparada teniendo como fundamento cardinal para ello, la situación doméstica de la acusada, quien es madre de dos niños de actuales 12 y 4 años, y un lactante de seis meses respecto de quienes ejerce labores de cuidado, existiendo otras medidas cautelares más proporcionales para asegurar la comparecencia de la acusada a los actos del procedimiento.

Apelada esta decisión por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por decisión de mayoría, la revocó, decretando prisión preventiva en su contra, desde que en su opinión la aludida medida cautelar resulta proporcionada, considerando la gravedad de la pena asignada por ley al delito (robo en lugar habitado), la existencia de procesos pendientes (un segundo proceso, Rit 13-2024 del mismo Tribunal, en que se encuentra acusada como autora del delito de robo en lugar no habitado), haber sido condenada por delitos de la misma especie y las reiteradas inasistencias a las audiencias de juicio oral anteriormente programada, todo lo cual determina la insuficiencia de otras medidas cautelares para asegurar su comparecencia a los actos del procedimiento, *“sin que el criterio de perspectiva de género aludido en la resolución recurrida tenga asidero más allá de lo expuesto por la acusada”*.

7°) Que, sin embargo, los fundamentos esgrimido en la resolución impugnada en esta sede constitucional, no se ajustan al mérito de lo obrado en los autos en los que se decreta la medida cautelar, Rol 66-2024 del Tribunal Oral en lo Penal de



Coyhaique, desde que según se registra en la historia de la causa en examen, ha sido programada tres audiencias de juicio, dos de ellas no realizadas por circunstancias ajenas a la no comparecencia injustificada de la amparada, de manera que ella no ha concurrido sin justificación alguna, a una audiencia de juicio oral.

Similar situación se observa en los autos Rol 13-2014 del mismo tribunal, en que ha sido fijada cuatro audiencias de juicio, tres de las cuales no fueron realizadas por que la acusada no se encontraba legalmente emplazada, a solicitud de los intervinientes, encontrarse la amparada hospitalizada conforme lo acreditó su defensa, no concurriendo sin justificación a la audiencia programada para el día 7 de marzo pasado, pese a encontrarse citada legalmente, lo que motivó a decretar una orden de detención en su contra.

Por tanto, *“las reiteradas inasistencias a las audiencias de juicio oral anteriormente programada”* a las que se aluden en la sentencia impugnada, es sólo una audiencia de juicio oral, circunstancia que repercute en la proporcionalidad de la medida cautelar y en la necesidad de cautela que se esgrime por la judicatura recurrida.

A ello se adiciona que se acreditó en esta sede constitucional, que efectivamente la amparada es madre de tres niños menores, de 12 y 4 años y un lactante de seis meses, respecto de quienes ejerce labores de cuidado y los que se han visto apartados de su progenitora, situación que indudablemente les afecta y más aún al menor de los niños, circunstancias particulares de la imputada y que harían la prisión preventiva extremadamente gravosa a su respecto.

**8°)** Que, en consecuencia, la resolución objeto del presente arbitrio, afecta



indebidamente la libertad personal de la recurrente al privársele de ésta mediante una resolución que es carente de toda fundamentación, lo que es mérito suficiente para acoger la acción constitucional intentada en estos antecedentes, dejar sin efecto la prisión preventiva decretada por el tribunal de alzada y mantener las medidas cautelares que se encontraban vigentes a su respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y disposiciones legales citadas, **se revoca** la sentencia apelada de siete de junio de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el Ingreso Corte N°185-2025 y, en su lugar, se decide que **se acoge** el recurso de amparo deducido en favor de Patricia Gemina Morales Nonque y, en consecuencia, **se deja sin efecto** la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en sus autos Rol 181-2025, por la que se decidió revocar lo decidido por el Tribunal Oral en lo Penal de la misma ciudad y decretar la prisión preventiva en su contra, **disponiéndose en su lugar que se confirma** lo decidido por el Tribunal de primer grado, en sus autos 66-2024, por lo que **se mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional** decretados en su oportunidad.

**Se previene que la Ministra Sra. Gajardo** concurre a la decisión de mayoría, pero fue de la opinión de intensificar la medida decretando arresto domiciliario total en contra de la amparada, de conformidad a lo previsto en el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.

**SE DISPONE LA INMEDIATA LIBERTAD DE LA AMPARADA, SI NO ESTUVIERA PRIVADA DE ELLA POR OTRA CAUSA,**

**Comuníquese por la vía más rápida.**



Regístrese y devuélvase.

**Rol N° 22.138-2025.**





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticinco de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

